

# SESIONES ORDINARIAS

## 2000

# ORDEN DEL DIA N° 1326

### COMISION DE EDUCACIÓN

**Impreso el día 27 de octubre de 2000**

Término del artículo 113: 7 de noviembre de 2000

**SUMARIO:** Ley 24.521 de Educación Superior. Modificación de su artículo 13. **Puiggrós y otros.** (3.070-D.-2000.)

#### Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Educación ha considerado el proyecto de ley de la señora diputada Puiggrós y otros señores diputados por el que se incorpora el inciso f) al artículo 13 de la ley 24.521, de educación superior, sobre el derecho de los estudiantes de instituciones estatales a acceder y completar los estudios de grado exentos de pagos de aranceles obligatorios; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 4 de octubre de 2000.

*Juan C. Millet. – Cristina Fernández de Kirchner. – Nilda M. Gómez de Marelli. – Eduardo G. Macaluse. – Marta del Carmen Argul. – Mónica S. Arnaldi. – Alfredo P. Bravo. – Adriana A. Colucigno. – María R. A. D'Errico. – Teresa H. Ferrari de Grand. – Isabel E. Foco. – María I. García de Cano. – Cristina R. Guevara. – Liliana Lissi. – Mabel G. Manzotti. – Mabel H. Müller. – Irma F. Parentella. – Luis F. Varese.*

En disidencia total:

*Jorge Zapata Mercader.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

#### AMPLIATORIA DE LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR

Artículo 1° – Incorpórase al artículo 13 de la ley 24.521 el inciso f), que quedará redactado de la siguiente manera:

f) A acceder y completar los estudios de grado exentos de pagos de aranceles obligatorios.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Adriana V. Puiggrós. – Alfredo P. Bravo.  
– Enrique G. Cardesa. – Isabel E. Foco.*

#### FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA TOTAL DEL SEÑOR DIPUTADO JORGE ZAPATA MERCADER

Señor Presidente:

De mi mayor consideración:

Adjunto al presente: Disidencia (proyecto de reforma ley de educación superior 24521, artículo 130, Puiggrós y otros, Expte. 3070-D- 2000).

Al regular los derechos y obligaciones de los estudiantes pertenecientes a universidades del Estado, el artículo 13° de la ley N° 24.521 dispone: “Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: a) Al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza. b) A asociarse libremente en centros de estudiantes, federaciones nacionales y regionales, a elegir sus representantes y a participar en el gobierno y en la vida de la institución, conforme a los estatutos, lo que establece la presente ley y, en su caso, las normas legales de las respectivas jurisdicciones. c) A obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, particularmente para el acceso y permanencia en los estudios de grado, conforme a las normas que reglamenten la materia. d) A recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior. e) A solicitar, cuando se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 20.596, la postergación o adelanto de exámenes o evaluaciones parciales o finales cuando las fechas previstas para los mismos se encuentren dentro de; período de preparación y/o participación.”

El proyecto del que manifestamos total disidencia pretende incorporar un nuevo inciso al mencionado artículo que establecería el derecho de los estudiantes a la gratuidad de la enseñanza pública universitaria de grado, eximiéndoles del pago de cualquier arancel.

Esta reforma proyectada viola, cuando menos, dos disposiciones:

En primer término, avanza en forma inaudita en una interpretación del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que es, cuando menos, inexacta, por cuanto se detiene en privilegiar la gratuidad de la enseñanza estatal frente a la equidad, principio este último que, bien entendido, puede llevar a un arancelamiento que favorezca esa gratuidad. Los dos principios, como quedó claro en los debates de la Convención Constituyente -de la que algunos de los autores del proyecto criticado tomaron parte- no pueden tomarse aisladamente sino interpretarlos en forma complementaria, mediante una hermenéutica que los integre y que no los aísle.

En segundo término, la disposición que se pretende añadir violenta el principio de autonomía universitaria (artículo 29 de la ley mencionada) en tanto atenta contra algunas de sus atribuciones: “administrar sus bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes que regulan la materia” (inciso c); y “establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes, así como el régimen de equivalencias” (inciso j). En particular, choca con la autarquía económico-financiera (artículo 59 de la misma ley). En efecto: dice el artículo 59 inciso c) de la ley de educación superior que las universidades podrán obtener recursos adicionales provenientes de contribuciones o tasas por los estudios de grado, y que deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico: estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes.

*Jorge Zapata Mercader*

## INFORME

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Educación al considerar el proyecto de ley de la señora diputada Puiggrós y otros señores diputados, cree innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan, por lo que los hace suyos y así lo expresa.

*Juan C. Millet.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

A lo largo de nuestra historia la educación pública constituyó un factor de identidad cultural y un instrumento de importancia estratégica para la inte-

gración de la sociedad. En ese sentido, los principios de equidad e igualdad de la educación pública estatal actuaron en forma conjunta y en ningún caso de manera restrictiva. El vehículo que posibilitó la escolarización masiva y sistemática en todos sus niveles fue la gratuidad. Este principio organizó y garantizó el acceso y permanencia de generaciones de argentinos y extranjeros en el sistema educativo nacional. La gratuidad se constituyó en un elemento democratizador que distinguió a nuestro país por los alcances de una educación que fue pensada para todos. Durante la Asamblea Constituyente de 1994 se desarrolló un amplio debate acerca de los enunciados que mejor garantizaran la igualdad de oportunidades y posibilidades educativas de todos los habitantes. Varios legisladores argumentaron la necesidad de vincular los términos gratuidad y equidad de manera que el segundo no limitara los alcances del primero sino que asegurara su función igualadora en relación al derecho constitucional a la educación de todo habitante de la Nación.

Los establecimientos de educación superior fueron y son parte gravitante de nuestro sistema educativo y deben ser concebidos como tales. Las opiniones sobre la pertinencia o no de establecer aranceles a los estudios superiores en las instituciones públicas se subordinan a:

—La inclusión del nivel superior como parte del sistema educativo al cual se adjudican las características de gratuidad y equidad en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

—La situación socioeconómica que atraviesa el país y que determina la enorme insuficiencia de oportunidades y posibilidades en estudio y trabajo de la mayoría de los jóvenes.

—La necesidad que tiene el país de contar en el presente y el futuro con suficiente cantidad de técnicos y profesionales de nivel superior, que contrasta con la capacidad económica de la población para costear estudios superiores.

Sin embargo, la Ley de Educación Superior deja abierta la posibilidad de alterar los principios unificadores antes descritos, ya que no enuncia explícitamente la gratuidad del nivel. Conscientes de la importancia que tiene la unidad del sistema educativo e informados del valor que asume para vastos sectores poblacionales que lo perciben como la última herramienta pública de su promoción humana, el proyecto de ley que propiciamos atiende a dar plenas garantías para su concreción. El artículo 75 inciso 19 de la Constitución de la Nación Argentina señala, como una de las atribuciones del Congreso: ... Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consolide la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discrimi-

nación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales...

Ante el impacto socialmente segregador de las políticas aplicadas y en resguardo de la última herramienta que el presente tiene de movilidad social vertical, en concordancia con el enuncia-

do constitucional y frente al desafío de responder prospectivamente desde la centralidad de las instituciones de educación superior en el contexto nacional y regional –hoy Mercosur–, solicitamos la urgente aprobación del presente proyecto de ley.

*Adriana V. Puiggrós. – Alfredo P. Bravo.  
– Enrique G. Cardesa. – Isabel E. Foco.*